



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

Buenos Aires, de mayo de 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente de falta de acción FSM 34505/2018/TO1/83, formado en el marco de la causa FSM 34505/2018/TO1 caratulada: "A [REDACTED] A E [REDACTED] A, CARLOS SEIN Y OTROS S/INF. ARTS. 210 Y 303 DEL CP", del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 3;

Y CONSIDERANDO:

1.- Que los Dres. Cynthia M [REDACTED] Z A [REDACTED] y Dario K [REDACTED], defensores del Carlos A [REDACTED] E [REDACTED] a, Maribel del A [REDACTED] a F [REDACTED] a, Naddya Lebira A [REDACTED] a del A [REDACTED] a, R [REDACTED] S.A y Espacio L [REDACTED] e S.R., mediante presentación digital de fecha 13/05/23, solicitaron, en lo que aquí interesa, se aparte a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol de parte querellante por cuanto el Decreto N° 274/2025 en su artículo 10 dispuso la derogación del Decreto 2226/2008 que la legitimaba para intervenir en este proceso. Sostuvo que si bien la UIF al momento del dictado del nuevo Decreto intervenía como de querellante en las actuaciones tal rol le fue revocado y que en consecuencia la misma debería ser apartada.

2.- Que el planteo mencionado recibió la adhesión por parte de la Dra. Marcela M [REDACTED], letrada defensora de Miguel C [REDACTED] a R [REDACTED] s y Carla C [REDACTED] a C [REDACTED] a.

3.- Que el representante del Ministerio Publico Fiscal, al contestar la vista conferida respecto de la intervención de la Unidad de Información Financiera en el rol de querellante sostuvo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un informe con acciones concretas que el país debía adoptar con el objeto de fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y la proliferación de armas. Refirió en tal sentido, que ese organismo internacional indicó que se debía reconsiderar la



#40026185#457013954#20250523140547390

intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa e se hizo un énfasis en que, la facultad de querellar de la UIF, era un caso aislado en el mundo y que, el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con el art. 120 C.N., era el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Sostuvo que el referido Decreto 274/2025 señaló que *“a los fines de dotar al funcionamiento de la Unidad de UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) de una mayor autonomía, eficacia y eficiencia, en pos de evitar una ‘Influencia o Interferencia Indevida’ en los términos de las recomendaciones del GAFI, y en virtud de las normas constitucionales y legales que regulan los diferentes roles y la actuación de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, corresponde derogar el Decreto N° 2226/08....*

A su vez, señaló que el Decreto 274/2025, en su art. 1, dispuso un nuevo ámbito de actuación/competencia de la UIF al sustituir el art. 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias. En función de todo ello, concluyó que la reforma introducida por la administración por medio del Decreto 274/05, no obedece a una mera alteración de los elementos circunstanciales que hacen a la competencia de la Unidad de Información Financiera, sino que directamente importó la revocación de sus facultades para querellar, por lo que conlleva a que dicho organismo pierda la legitimación activa para seguir interviniendo, agregando que dicha reforma resulta operativa en función de lo dispuesto por el art. 2 del C.P. y art. 75 de inc. 22 de la C.N., por resultar más benigna para los imputados.

4.- Que, por su parte, el representante de la Unidad de Información Financiera, al evacuar la vista conferida, solicitó se rechace el planteo introducido y se impongan las costas procesales correspondientes. Al fundar su petición sostuvo no puede aplicarse retroactivamente el Decreto del PEN N° 274/2025 a los procesos en los que esa Unidad de Información Financiera ya se encontraba constituido como parte querellante por cuanto el Decreto nada dice





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

en orden a la intervención y/o cese en las tareas que desarrolla esa Unidad respecto de querellas ya constituidas, sino que por el contrario sólo impide a que en el futuro pueda ejercer ese rol, sin indicar nada en relación a las querellas activas del Organismo ni tampoco la conducta que debe seguir con respecto a las obligaciones ya asumidas, por lo que debería estarse a los roles ya asumidos, dado que de haberse tenido en miras el apartamiento de esa Unidad en los procesos ya iniciados se hubiera incorporado ello al texto del Decreto. Indicó que una interpretación en contrario a lo indicado vulnera la seguridad jurídica, el principio de legalidad y los derechos adquiridos por esa parte, los cuales fueran oportunamente otorgados por el Poder Legislativo (Ley), el Poder Ejecutivo (oportuna autorización) y el Poder Judicial (auto de constitución de parte Querellante por parte de esa Unidad).

Indicó, además, que el Informe de Evaluación del GAFI nada dice respecto a la imposibilidad de ese organismo de querellar, sino por el contrario se recomienda reconsiderar la oportunidad en que la UIF y otros organismos deben actuar como querellantes. Por lo demás, señaló que disponer el apartamiento de esa Unidad causaría un gravamen irreparable e importaría el riesgo de que cientos de casos de suma gravedad en la que se investigó el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, puedan quedar impunes, frente al trabajo realizado durante años por los profesionales especializados de esta Unidad, cuyo apartamiento sorpresivo y repentino apartamiento afectaría al avance y conclusión de las investigaciones, responsabilizando consecuentemente al Estado Nacional por los compromisos internacionalmente asumidos contra la lucha de estos delitos.

En función de todo ello, solicitó se rechace el planteo de excepción de falta de acción y, consecuentemente, se mantenga a la Unidad de Información Financiera en el rol de parte querellante.

5.-Que, a los fines de abordar la cuestión traída a estudio, cabe señalar que art. 10 del Decreto del PEN N° 274/2025 dispuso derogar el Decreto 2226/08 que autorizaba a la UIF a



#40026185#457013954#20250523140547390

intervenir como parte querellante en los procesos en que se investigaran los delitos tipificados en la ley que dio origen a ese organismo Estatal (ley 25.246).

6.- Que el dictado del Decreto en cuestión constituye una decisión de política criminal del Poder Ejecutivo Nacional que importa darle a la UIF mayor preponderancia en la prevención del delito al focalizar su actuación en las actividades de control y análisis técnico y suprimir su intervención como querellante en las causas penales en las que la función de acusación es llevada por parte del Ministerio Público Fiscal y así evitar una superposición de funciones con este último.

7.- Que, por consiguiente, la oportunidad, mérito o conveniencia de dicha decisión resultan ajenas al marco del control judicial.

8.- Que, ahora bien, la disposición contenida en el art. 10 del Decreto 274/2025 resulta operativa no sólo para casos futuros sino también para aquellos casos en los que la Unidad de Información Financiera se desempeña actualmente en el rol de parte querellante. En efecto, el Decreto mencionado, en orden a su implementación y aplicación, no efectúa distinción alguna entre casos actuales o futuros.

En este sentido, cabe agregar que, de lo contrario, se violaría el principio de igualdad respecto de los imputados de los procesos en los que actualmente la UIF se encuentra desempeñado el rol de parte querellante y que, por ende, contarían con un acusador adicional, a diferencia de los casos posteriores al dictado del Decreto.

9.- Que, de otro lado, tampoco se advierte (como se invoca) que la interpretación en la que se sustenta la presente pudiese afectar al principio general atinente a la irretroactividad de las leyes pues, justamente, lo que se plantea es la separación **actual** del organismo del rol que ocupaba sobre la base de una normativa recientemente derogada, como así también el impedimento **futuro** de asumir dicho rol en el proceso (en la medida en que no se





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

reestablezca dicha facultad), sin que lo que aquí se resuelva tenga incidencia en la actuación **anterior** del organismo en el proceso.

10.- Que, por otra parte, la interpretación aquí sostenida no soslaya alguna supuesta facultad implícita de querellar por parte de la UIF que, según se invoca, surgiría de la ley N° 25.246.

Ello es así, en la medida que por la ley 25.246 se estableció como función de ese organismo la prevención del delito de lavado de activos, mas no que ello implicara la facultad de querellar. En concreto, las circunstancias relativas a que por la ley mencionada no se haya contemplado expresamente la facultad de querellar de la UIF y a que se haya considerado necesario dictar el Decreto N° 2226/08 recientemente derogado, son suficientemente demostrativas de lo que se acaba de afirmar. En la misma dirección de este razonamiento, al momento de contestar la vista conferida, la UIF recordó que *“...En el año 2008, el entonces Poder Ejecutivo interpretó dicha Ley Orgánica y entendió que, **para que el organismo pueda cumplir con los fines dispuestos, era necesario brindarle una autorización expresa para participar en procesos penales como parte Querellante**, dictando así el Decreto N° 2226/08. Misma postura mantuvieron el resto de los Gobiernos de turno hasta la fecha...”* -el resaltado es de la presente.

11.- Que, asimismo, la UIF sostuvo que *“...La interpretación que las defensas hacen sobre los alcances y finalidad del Decreto N° 274/2025 afectan gravemente el principio de legalidad y la seguridad jurídica que rigen en los procesos penales. Estos principios fundamentales se basan en la idea de ‘Nullum crimen sine scripta, stricta, certa et pravia lege’...”*. Al respecto, cabe resaltar, primero, que no se advierte la conexión de lo planteado en el presente incidente con el principio de legalidad citado (pues no se discute aquí alguna cuestión atinente al carácter de cierta, escrita y previa que debe tener la definición de algún delito) y, segundo, que el hecho que la UIF actualmente carezca de la facultad de constituirse y ejercer el rol de parte querellante en esta clase de procesos que anteriormente tenía no constituye el resultado de una interpretación legal determinada que atente contra la seguridad



jurídica, sino que es inexorable derivación de haberse derogado el sustento normativo de aquella facultad por el mismo medio por el que oportunamente se la otorgó (decreto del Poder Ejecutivo Nacional), temperamentos estos en los que el tribunal no tuvo, lógicamente, alguna intervención.

12.- Que la misma suerte que los argumentos anteriores debe correr lo alegado por la UIF en punto a que las coyunturales modificaciones en la política criminal (con motivo de las cuales se otorga o se deroga la facultad del referido organismo de constituirse en parte querellante en procesos penales por determinados delitos) pudiese afectar las reglas del debido proceso, ya que resulta claro que la preservación de la referida garantía constitucional no requiere que la política criminal específicamente vinculada a un muy limitado aspecto como el que se discute (si es conveniente o necesario facultar a la UIF para constituirse como parte querellante en determinados procesos penales) deba mantenerse inalterable en el tiempo.

13.- Que, por lo demás, tampoco se coincide con lo expresado por la representación de la UIF en el sentido que por la eventual separación de su rol de parte querellante con motivo del dictado del Decreto N° 2226/08 ***“...se pondrían en riesgo cientos de causas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en las cuales la teoría del caso de la acusación se basa y depende del trabajo realizado durante años por los profesionales especializados de esta Unidad, cuyo apartamiento sorpresivo y repentino afectaría el avance y conclusión de estas investigaciones, responsabilizando al Estado Nacional por los compromisos internacionalmente asumidos contra la lucha de estos delitos, los cuales podrían quedar impunes...”*** . Ello, con motivo de las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal que derivan de los arts. 120 de la C.N.; 1, 25 y ccdtes de la ley 24.946; 1, 3 y ccdtes. de la ley 27.148; 5, 65 y ccdtes. del C.P.P.N.

De hecho, entre los fundamentos del Decreto N° 274/2025, se destacó *“...Que, por otra parte, en la ‘Acción prioritaria d)’ expuesta en el Informe de Evaluación Mutua y en la ‘Acción*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

recomendada e)' para el Resultado Inmediato 6 del Informe de Evaluación Mutua, el GAFI indicó que nuestro país debe reconsiderar la intervención de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa."

"Que en el ámbito de las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) de la REPÚBLICA ARGENTINA es un caso aislado respecto a la facultad de querellar prevista en el Decreto N° 2226/08."

"Que, en nuestro país, y de acuerdo al artículo 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad."

"Que, por otro lado, en el artículo 19 de la Ley N° 25.246 se establece que cuando la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ello será comunicado al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal."

"Que ello se suma a la competencia de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) para poner a disposición del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente."



“Que el esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar.”

14.- Que no controvierte el razonamiento exteriorizado hasta aquí lo expresado por la UIF en cuanto a que *“...la actuación de esta UIF en las causas en las que es parte Querellante, se funda no sólo en la autorización oportunamente otorgada por el Poder Ejecutivo de turno, sino también en su función de **garante de la protección y correcto funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y del orden económico y financiero**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 25.246...”*, primero porque, se repite, aquella *“autorización oportunamente otorgada por el Poder Ejecutivo”* fue derogada por ese mismo poder y, por otra parte, porque la actuación de la parte querellante en un proceso penal ineludiblemente se relaciona a un objeto procesal determinado que no puede sino estar basado en la hipótesis de un delito previamente cometido, de modo que tal actuación o la falta de ella no tiene vinculación con el sistema de prevención de los delitos. Por lo demás, de la transcripción hecha en la consideración anterior surge con bastante claridad la finalidad del Poder Ejecutivo Nacional en orden a que la actuación en un proceso penal determinado con motivo de la posible comisión de un delito de lavado de activos sea desarrollada por el Ministerio Público Fiscal y no por la UIIF y que esta última se concentre en la actividad de prevención y eventual colaboración con el Ministerio Público Fiscal para evitar el riesgo *“...de contradicciones en el obrar...”* (en los términos del Decreto N° 274/2025).

15.- Que, asimismo, esa finalidad de evitar el riesgo de contradicciones en el obrar al que se hace expresa referencia en los fundamentos del Decreto N° 274/2025 (que derivaría de la actuación conjunta tanto de la UIF -como querellante- como del Ministerio Público Fiscal en un mismo proceso penal) constituye una razón concurrente para la decisión que se establecerá por la presente, pues no parece un razonamiento consistente en que, pese a esa





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

específica reflexión, se hubiese asumido mantener ese riesgo en las causas en que la UIF actuaba como querellante antes del decreto mencionado.

Por todo ello, el Tribunal, de conformidad a lo dictaminado por el señor Fiscal de Juicio, **RESUELVE**:

I.- HACER LUGAR al apartamiento de la Unidad de Información Financiera en su rol de parte querellante en este proceso.

II.- SIN COSTAS (arts. 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.N

Regístrese, notifíquese mediante cédula electrónica y, una vez firme, procédase como corresponda en el sistema Lex 100 y comuníquese lo aquí decidido a la Excma. Cámara Federal de Casación Penal en función de los recursos que tramitan ante dicho Tribunal.

KARINA ROSARIO PERILLI
JUEZ DE CAMARA

DIEGO GARCIA BERRO
JUEZ DE CAMARA

JORGE ALEJANDRO ZABALA
Juez de Cámara

EDUARDO E. BOTELLO
SECRETARIO



#40026185#457013954#20250523140547390



Validez desconocida
Digitally signed by KARINA
ROSARIO PERELL
Date: 2025.05.23 14:06:55 ART

Validez desconocida
Digitally signed by DIEGO GARCIA
BERRO
Date: 2025.05.23 14:10:11 ART

Validez desconocida
Digitally signed by JORGE
ALEJANDRO ZABALA
Date: 2025.05.23 14:23:31 ART

Validez desconocida
Digitally signed by EDUARDO
EMILIO BOTELO
Date: 2025.05.23 14:25:16 ART



#40026185#457013954#20250523140547390